

La deuda externa, una herencia pesada para el próximo gobierno

Desde el inicio de la actual administración, en enero de 2007, hasta diciembre de 2015 el sector público ecuatoriano contrató, según las estadísticas del Ministerio de Finanzas, deuda externa por \$27.124 millones. Si se excluyen los créditos en los cuales los gobiernos autónomos descentralizados (o sus empresas) y el Banco del Estado (cuya función principal es financiar proyectos de los GADs) son deudores directos o ejecutores, entonces el monto baja hasta \$20.800 millones. Más allá de que ese elevado monto fue contratado en un período durante la mayor parte del cual el país se benefició de altos precios del petróleo, el servicio de esa deuda representará una carga pesada en los próximos años, tanto para las cuentas fiscales como para las externas.

En los boletines de deuda externa que publica el Ministerio de Finanzas se detalla la fecha de firma de cada crédito, su plazo (incluidos los años de gracia), su monto, el interés al que está sujeto y el tipo de amortización. En base a esta información hemos estimado cuántos recursos deberá destinar el próximo gobierno al servicio (pago de capital e intereses) de la deuda contratada durante la actual administración. Para simplificar el cálculo, y dado que en la mayoría de los casos la amortización de los créditos es semestral, hemos considerado un período que inicia en el segundo semestre de 2017 (julio) y termina en el primer semestre de 2021 (junio).

Según estas estimaciones¹, durante ese tiempo (que corresponde casi exactamente al próximo período presidencial que irá desde mayo 2017

¹ Hemos asumido que para todos los casos los intereses se pagan sobre el saldo del crédito

hasta mayo 2021) el futuro gobierno deberá destinar \$10.030 millones al servicio de la deuda externa contratada entre 2007 y 2015. En otras palabras, el próximo gobierno deberá destinar, en promedio, \$2.500 millones anuales al servicio de la deuda externa heredada de la actual gestión.

A manera de referencia, entre 2007 y 2015 el gobierno de Rafael Correa destinó, en promedio, \$1.758 millones anuales² al servicio de la deuda externa (excluyendo aquí también la deuda de GADs y del BEDE). Ese servicio, a diferencia del que estamos calculando para el próximo período presidencial, corresponde no sólo a deuda heredada de administraciones anteriores, sino también a la contratada ya en tiempos de la “Revolución Ciudadana”.

Dejando de lado los promedios, el año más difícil para el próximo gobierno en lo referente al servicio de la deuda externa (siempre considerando solamente la deuda contratada durante la actual gestión) será 2020, cuando los pagos bordearán los \$3.400 millones, casi la mitad de los cuales corresponden al vencimiento de las dos colocaciones de bonos (cada una por \$750 millones) que se llevaron a cabo en marzo y mayo del año pasado. Si bien para este ejercicio hemos considerado únicamente el siguiente período presidencial, la “herencia” del actual gobierno en cuanto a deuda externa se extiende mucho más allá. Por ejemplo, en 2024 el gobierno de turno

² Para este cálculo hemos excluido el servicio de la deuda externa de 2009, ya que para ese año se contabiliza una amortización por \$2.987 millones correspondiente al pago de los Bonos Global 2012 y 2030. Si bien el gobierno retiró del mercado bonos por ese valor, el pago efectivo fue mucho menor.

deberá destinar \$2.000 millones sólo para pagar los bonos que se colocaron, al 7,95% anual, en 2014.

Además, a falta de 15 meses para que concluya el actual período presidencial, con ingresos fiscales a la baja y con un riesgo país que supera los 1.300 puntos, es de suponer que muchos de los nuevos créditos externos a los que logre acceder el gobierno serán en condiciones onerosas para el país (altas tasas y plazos cortos, como el que se firmó con el banco chino ICBC por cerca de \$1.000 millones), comprometiendo aún más las cuentas fiscales de los próximos años.

Hemos centrado nuestros cálculos en la deuda externa porque su servicio, además de a las cuentas fiscales, compromete también a la balanza de pagos, más aún en un contexto de precios bajos de las materias primas y dólar fuerte como el que se espera que continúe en los años venideros. Es decir, al déficit esperado en la cuenta corriente se sumaría un deterioro en la cuenta financiera, afectando la sostenibilidad de la dolarización.

Pero la herencia del actual gobierno a su sucesor no se limita a la deuda externa que contabiliza el Ministerio de Finanzas. De hecho, habría que considerar también las preventas de petróleo -que pagan intereses y comprometen ingresos que correspondían a futuras administraciones-, la deuda interna (principalmente con el IESS) y los atrasos con proveedores del Estado. La sostenida caída de los ingresos fiscales hace suponer que las cuentas por pagar que el gobierno dejará a su sucesor serán multimillonarias.